

Señor  
**JUEZ ADMINISTRATIVO ORAL DE BUGA (REPARTO)**  
Ciudad.

**CESAR HUGO HENAO CORREA**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.684.032 de Cali (Valle), portador de la Tarjeta Profesional No. 84.396 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado judicial de los señores **YOLANDA HIDALGO MOLINA**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 29.400.930 expedida en Dagua (V.), **GABRIEL HIDALGO HIDALGO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.486.213 expedida en Miranda (Cauca), **MARIA DORA MOLINA PEREZ**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 29.232.609 expedida en Buenaventura (V.), **ANA LETICIA HIDALGO MOLINA**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 29.401.815 expedida en Dagua (V.), quien actúa en nombre propio y en representación de su menor hija **NATALIA RODRIGUEZ HIDALGO**, **VICTOR ALFONSO DELGADO HIDALGO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.111.739.594 expedida en Buenaventura (V.), quien actúa en nombre propio y en representación de su menor hija **VICTORIA DEL MAR DELGADO OLIVEROS**, **SORANYI DELGADO HIDALGO**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.144.153.919 expedida en Cali (Valle), **DIANA MAYESTI FERNANDEZ POVEDA**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.849.755 expedida en Villavicencio (Meta), quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijos **ALBERTO HIDALGO FERNANDEZ** y **LILIANA HIDALGO FERNANDEZ**, **ROBINSON OROZCO HIDALGO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.114.730.134 expedida en Dagua (V.) y **WENDY CAROLINA MOSQUERA CELORIO**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.114.731.694 expedida en Dagua (V.), quienes actúan en nombre propio y en representación de su menor hija **ISABELA OROZCO MOSQUERA**, **KEVIN LUVIAN FERNANDEZ POVEDA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.116.272.587 expedida en Tuluá (V.) y **LUIS GONZAGA OROZCO HENAO**, mayor de edad y vecino de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.967.078 expedida en Cali (V.), vecinos todos de Yumbo (Valle), , acudo ante usted a fin de presentar demanda contra el **MUNICIPIO DE CALIMA – EL DARIEN (V)**, representado por el señor Alcalde **HECTOR FABIO ZAPATA ARIAS**, o por quien haga sus veces al momento de la notificación, **POLICIA NACIONAL**, representada por el Director General **JORGE HERNANDO NIETO ROJAS**, o por quien haga sus veces al momento de la notificación, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. y **EJERCITO NACIONAL**, representado por su Comandante, Gral. **ALBERTO JOSÉ MEJÍA FERRERO** o por quien haga sus veces al momento de la notificación, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., para que mediante la Pretensión de **REPARACIÓN DIRECTA**, consagrada en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con citación del Ministerio Público y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se decreten las siguientes o similares

### **PRETENSIONES**

**PRIMERA:** Que se reconozca que el **MUNICIPIO DE CALIMA – EL DARIEN (V)**, la **POLICIA NACIONAL**, y el **EJERCITO NACIONAL**, son responsables administrativamente de los perjuicios materiales, morales y daño a la salud que se les ocasionaron a los convocantes, todos ellos víctimas del conflicto armado, con motivo del procedimiento “expres” de desalojo que llevó a cabo el día 20 de agosto de 2015 en horas de la mañana, el señor Inspector de Municipal de

Policía de Calima El Darién, con apoyo de la Policía Nacional y Ejército Nacional (Batallón de Alta Montaña No. 3 Dr. Rodrigo Lloreda Caicedo), del predio que ocupan pacíficamente desde hacía seis (6) meses aproximadamente denominado “Rosas de los Vientos”, hecho que sin lugar a dudas constituye una evidente falla en el servicio.

**SEGUNDA.** Como consecuencia de la declaración anterior se condene al **MUNICIPIO DE CALIMA – EL DARIEN (V)**, la **POLICIA NACIONAL** y el **EJERCITO NACIONAL**, pagar a los convocantes los perjuicios materiales, morales y daño a la salud según correspondiere y que se les ocasionó y viene ocasionando con tal hecho, de acuerdo a la siguiente estimación y teniendo en cuenta los parámetros jurisprudenciales dictados por el H. Consejo de Estado para esta clase de procesos:

### **PERJUICIOS MATERIALES**

#### **DAÑO EMERGENTE:**

Corresponden a los materiales de construcción con los cuales adecuaron sus viviendas (tejas de zinc, madera, puntillas, amarras, puertas, ventanas); herramientas (martillos, porras, serruchos, seguetas, barras, picas, palas, azadones, niveles, escuadras, mangueras, etc.) utensilios de cocina (platos, ollas, pocillos, vasos, cucharas, cuchillos, sartenes, etc.), ropa, camas, animales de compañía (gatos y perros) y animales de cría (gallinas, cerdos, patos), elementos que fueron adquiriendo poco a poco en la medida de sus escasas capacidades económicas y de los cuales no conservan facturas pues todo lo que les pertenecía fue embalado por las autoridades demandadas en vehículos particulares (camión y volqueta) y llevados a lugar desconocido por los actores donde fueron abandonados como basura y que son valorados por cada grupo familiar en las cifras que a continuación se relacionan:

Grupo de YOLANDA HIDALGO MOLINA y sus progenitores Sres. GABRIEL HIDALGO HIDALGO (82 años de edad) y MARIA DORA MOLINA PEREZ (67 años de edad), los valora en la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 6.500.000.00)

Grupo de ANA LETICIA HIDALGO MOLINA y su menor hija NATALIA RODRIGUEZ HIDALGO, los valora en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 3.000.000.00)

Grupo de VICTOR ALFONSO DELGADO HIDALGO y su menor hija VICTORIA DEL MAR DELGADO OLIVEROS, los valora en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 3.000.000.00)

SORANYI DELGADO HIDALGO, los valora en la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 2.500.000.00)

Grupo de DIANA MAYESTI FERNANDEZ POVEDA y sus menores hijos ALBERTO HIDALGO FERNANDEZ y LILIANA HIDALGO FERNANDEZ, los valora en la suma de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 5.000.000.00)

Grupo familiar de ROBINSON OROZCO HIDALGO, WENDY CAROLINA MOSQUERA CELORIO y sus hijos KEVIN LUVIAN FERNANDEZ POVEDA e ISABELA OROZCO MOSQUERA los valora en la suma de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 5.000.000.00)

LUIS GONZAGA OROZCO HENAO, los valora en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 3.000.000.00)

#### **B.PERJUICIOS MORALES.**

Conforme a oportuno pronunciamiento del H. Consejo de Estado<sup>1</sup>, la valoración del perjuicio moral se tendrá en **salarios mínimos legales mensuales** atendiendo los principios de Reparación Integral y Equidad que señala el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en tanto fueron objeto de un irregular y violento proceso de desalojo, despojados absolutamente de todas sus pertenencias y arrojados a deambular como parias en su propia patria únicamente con lo que llevaban puesto, por lo cual se tasan en cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los perjudicados directos y demandantes, o lo que corresponda según sentencia unificadora del 28 de agosto de 2014, dictada dentro del radicado No 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172), de la cual fue ponente la Dra. Olga Melida Valle de la Hoz. Ellos son:

YOLANDA HIDALGO MOLINA, GABRIEL HIDALGO HIDALGO, MARIA DORA MOLINA PEREZ, ANA LETICIA HIDALGO MOLINA, quien representa además a su menor hija NATALIA RODRIGUEZ HIDALGO, VICTOR ALFONSO DELGADO HIDALGO, quien actúa además en representación de su menor hija VICTORIA DEL MAR DELGADO OLIVEROS, SORANYI DELGADO HIDALGO, DIANA MAYESTI FERNANDEZ POVEDA, quién actúa además en representación de sus menores hijos ALBERTO HIDALGO FERNANDEZ y LILIANA HIDALGO FERNANDEZ, ROBINSON OROZCO HIDALGO y WENDY CAROLINA MOSQUERA CELORIO, quienes actúan además en representación de su menor hija ISABELA OROZCO MOSQUERA, KEVIN LUVIAN FERNANDEZ POVEDA y LUIS GONZAGA OROZCO HENAO.

**C.DAÑO A LA SALUD.** Este perjuicio inmaterial tiene su fundamento en el caso bajo examen, en el hecho dañino del que fueron víctimas todos y cada uno de los demandantes, el cual les produjo graves lesiones psíquicas que los privan del disfrute normal de sus actividades tanto personales como familiares, en tanto revivieron en ellos los episodios violentos de que fueron víctimas por el conflicto armado que vive nuestro país y que los obligó a desplazarse forzosamente de sus lugares de origen; es decir, fueron revictimizados pero esta vez no por grupos al margen de la ley sino por las propias autoridades del Estado.

Se reafirma la existencia de este tipo de perjuicio, en el hecho de que no han logrado obtener una recuperación de su salud sobre todo mental, lo que les ha causado una considerable disminución en el desarrollo de todas sus labores, ocasionándoles serios traumatismos, aspecto que se ha visto reflejado en sus relaciones interpersonales; lo anterior se manifiesta en el hecho de que sus actividades no sean tan agradables como cuando gozaba de una capacidad física y psíquica normal, situaciones estas que serán ampliamente demostradas.

La tasación del presente perjuicio, se estima en CIEN (100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES vigentes para cada uno de los demandantes, o lo que corresponda según lo determinado por la Sentencia Unificadora del 28 de agosto de 2014, dictada por el Consejo de Estado dentro del radicado No 05001-23-31-000-1997-01172-01(31170), del cual fue ponente el Dr. Enrique Gil Botero.

Además, la perjudicada directa Sra. ANA LETICIA HIDALGO MOLINA, fue víctima de agresión física por parte de miembros de la Policía Nacional, tal como lo denunció penal y disciplinariamente, otorgándosele una incapacidad médico legal definitiva de siete (7) días, por lo cual se tasa este daño en treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, o lo que corresponda según lo determinado por la Sentencia Unificadora del 28 de agosto de 2014, dictada por el Consejo de Estado dentro del radicado No 05001-23-31-000-1997-01172-01(31170), del cual fue ponente el Dr. Enrique Gil Botero.

No obstante presumirse este tipo de perjuicios se ha considerado y se estima que para su evidencia se alleguen testimonios y pruebas clínicas como dictamen de psiquiatría; empero, la particular situación de desarraigo y constante deambular de este grupo de personas por diferentes lugares de la geografía nacional, constituye un imposible que alguien advierta el

---

<sup>1</sup>. Sentencia del 6 de septiembre de 2001 con ponencia del Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez, dentro del proceso propuesto por Belén González y otros contra el Instituto Nacional de Vías y Ministerio de Transporte.

padecimiento psicológico y afectación moral de aquellos. Por esa sencilla razón no se traen testigos para demostrar este tópico.

**TERCERA.** Que se ordene el reajuste monetario de las condenas líquidas, teniendo en cuenta lo dispuesto en los Artículos 192 y siguientes del C.P.A.C.A.

**CUARTA.** Que se ordene el pago de los intereses conforme lo establecido en el artículo 195 del C.P.A.C.A.

## **HECHOS Y OMISIONES FUNDAMENTALES DE LA PRETENSIÓN**

Sirven de fundamento a las pretensiones los siguientes hechos:

**PRIMERO:** Los demandantes Sres. YOLANDA HIDALGO MOLINA, GABRIEL HIDALGO HIDALGO, MARIA DORA MOLINA PEREZ, ANA LETICIA HIDALGO MOLINA, su menor hija NATALIA RODRIGUEZ HIDALGO, VICTOR ALFONSO DELGADO HIDALGO, su menor hija VICTORIA DEL MAR DELGADO OLIVEROS, SORANYI DELGADO HIDALGO, DIANA MAYESTI FERNANDEZ POVEDA, sus menores hijos ALBERTO HIDALGO FERNANDEZ y LILIANA HIDALGO FERNANDEZ, ROBINSON OROZCO HIDALGO y WENDY CAROLINA MOSQUERA CELORIO, su menor hija ISABELA OROZCO MOSQUERA, KEVIN LUVIAN FERNANDEZ POVEDA y LUIS GONZAGA OROZCO HENAO, todos cabeza de familia y algunos de ellos con hijos menores, son desplazados y como tal se encuentran registrados en la Unidad de Víctimas (RUV).

**SEGUNDO:** Aproximadamente para el mes de febrero del año 2015, ante dicha situación de desplazamiento que sufrían (y aún soportan), unas diez (10) familias con un total de 35 miembros, procurando un techo que los resguardara de la intemperie, ocuparon de forma pacífica unas casas en abandono ubicadas a unos cuatro (4) kilómetros del Corregimiento de Puente Tierra, jurisdicción del municipio de Calima El Darién, predio denominado “Rosas de los Vientos”.

**TERCERO:** Una vez asentados, se dieron a la tarea con sus escasos recursos, de conseguir materiales para entechar (madera, tejas de zinc, puntilla, alambre, amarras, etc.), trasladar tierra para tapar los enormes huecos que se encontraban por todo el predio; por supuesto, de todas las formas posibles, consiguieron sus utensilios de cocina (estufas, ollas, sartenes, platos, pocillos, vasos, cubiertos, etc.), camas, ropas, electrodomésticos, además de herramientas (palas, picas, barretones, azadones, etc.); de igual manera algunas plantas eléctricas, guadañas y finalmente sus animales domésticos (gatos y perros) y de cría (gallinas, patos y cerdos).

**CUARTO:** Luego de permanecer establecidos por seis (6) meses en dicho lugar, el día 20 de agosto de 2015 en horas de la mañana, cuando la mayoría de los desplazados habitantes del lugar se encontraban trabajando y/o en la Unidad de Víctimas, llegaron varias personas entre ellas el doctor GONZALO BETANCOURT, Inspector Municipal de Policía de Calima El Darién en vehículos particulares (camión y volqueta), miembros de la policía nacional y ejército nacional, aduciendo que iban a practicar un desalojo pero sin exhibir orden alguna. No obstante poner en conocimiento del señor Inspector la condición de desplazados y víctimas del conflicto, de encontrarse en el sitio ancianos y menores de edad (sujetos que gozan además de especial protección constitucional) hizo oídos sordos a tal situación y literalmente ordenó arrasar con todo, desde los techos de las construcciones que habían levantado hasta todos sus enseres, procediendo a arrumarlos en los referidos vehículos para luego despacharlos a lugar desconocido para votarlos como basura, dejándolos única y exclusivamente con lo que llevaban puesto.

**QUINTO:** Tras insistir en tres (3) oportunidades mediante derechos de petición y finalmente tener que acudir a la acción de tutela para que se les garantizara el fundamental derecho de petición que les asistía, el señor Inspector Municipal de Policía de Calima – El Darién envió copia íntegra del expediente de protección policiva de donde emana el irregular procedimiento de desalojo que se practicó y del cual se derivaría la evidente vulneración o transgresión a derechos fundamentales que aún hoy subsisten y que los han afectado en su salud física y mental. Y se afirma que fue irregular por violatorio al derecho fundamental al debido proceso que le asistía a

los demandantes, pues el mismo fue resuelto en tan solo VEINTE (20) HORAS Y DIEZ (10) MINUTOS, contados desde la presentación de la demanda (11:50 a.m. del 19 de agosto de 2015) al inicio de la diligencia de desalojo (10:00 a.m. del 20 de agosto de 2015), lo que podría constituirse en el proceso más veloz en resolverse en nuestro país. Por supuesto tal procedimiento transgredió principios de publicidad, contradicción y derechos fundamentales como de defensa y debido proceso, como se detallará en el cuerpo de esta demanda.

**SEXTO:** Como se indicó en el punto anterior, la correspondiente querrela de protección policiva fue radicada por el abogado Luis Francisco Mora Gallego, actuando a través de poder conferido por el señor Cristian Eduardo García Vargas quien a su vez actúa como representante legal de la sociedad FINCAR S.A., el día 19 de agosto de 2015 a las once y cincuenta minutos de la mañana (11:50 a.m.)

De manera muy diligente, el señor Alcalde (encargado) del municipio de Calima – El Darién, señor WILLIAN EMILIO GIL VALLEJO, el mismo día de presentación de la querrela (19 de agosto de 2015), profiere Auto Admisorio 001 “*Por medio del cual se autoriza un procedimiento sumario de amparo policivo por perturbación a la posesión e invasión de tierras instaurado por Fincar S.A. contra personas indeterminadas*”. En su parte resolutive, ordenó:

“...PRIMERO: Admítase la demanda de PROTECCION POLICIVA instaurada por el señor LUIS FRANCISCO MORA GALLEGO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.520.529 de Bucaramanga (Santander), en representación de FINCAR S.A., mediante escrito de agosto 19 de 2015 el señor LUIS FRANCISCO MORA GALLEGO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.520.529 de Bucaramanga (Santander), en representación de FINCAR S.A.

**SEGUNDO: Remítase el expediente a la Inspección Municipal de Policía de Calima El Darién, para lo de su competencia de acuerdo a lo establecido en el Decreto 001 de enero de 2012, del municipio de Calima El Darién y Ordenanza 343 de 2012, para que ORDENE la práctica de diligencia de INSPECCIÓN OCULAR, al predio objeto de la demanda, con el fin de especificar su ubicación, linderos, nomenclatura y demás circunstancias que lo identifiquen.**

**TERCERO: Ordénese dentro de la práctica de pruebas a realizar, en la INSPECCIÓN OCULAR que se llevará a cabo, la ratificación de los testigos extra proceso, como quiera que así lo solicita el demandante.**

**CUARTO: Téngase como prueba documental lo aportado en el escrito de demanda y en su momento darle la apreciación correspondiente.**

**QUINTO: Reconózcase personería jurídica para actuar, al doctor LUIS FRANCISCO MORA GALLEGO, como apoderado del demandante.**

**SEXTO: Sírvase tener en cuenta los artículos 312, “procedimientos especiales de policía”, literales c ss y demás normas concordantes.**

**SEPTIMO: NOTIFICAR PERSONALMENTE EL PRESENTE AUTO...**” (subraya y resalto míos).

LA NOTIFICACION PERSONAL ORDENADA EN DICHA PROVIDENCIA, BRILLA POR SU AUSENCIA.

**SEPTIMO:** Dando cumplimiento a lo dispuesto en la transcrita providencia, el señor Alcalde (e) del municipio de Calima – El Darién, remite el mismo día (19 de agosto de 2015) el expediente al señor Inspector Municipal de Policía de Calima El Darién, para que practique la diligencia de inspección ocular ordenad ordenada en su numeral segundo; en efecto, dicho funcionario profiere auto (sin número) con fecha del mismo día (19 de agosto de 2015), mediante el cual ordena “... **la práctica de Diligencia de la Inspección Ocular al predio denominado ‘ROSA DE LOS VIENTOS’. Ubicado en la Vereda Puente Tierra. Procédase a fijar para el día 20 de Agosto del 2015, a las 10:00 A.M...**”. Finaliza su providencia ordenando su **NOTIFICACION** y cumplimiento para luego suscribirla junto a la secretaria del despacho.

Los actos procesales de notificación tanto del Auto Admisorio No 001 como del emanado de la Inspección de Policía brillan por su ausencia en el expediente, lo que me permite inferir que no

se produjeron en la forma establecida en las normas procesales, violándose flagrantemente el derecho fundamental al debido proceso de los convocantes, pues de hecho se les cercenó el derecho a la defensa, a la publicidad, de contradicción, etc.

**OCTAVO:** El artículo 7 del Decreto 0747 de 1992, establece:

**“ARTÍCULO 7. En el auto en que se avoque conocimiento, se fijará fecha y hora para la práctica de la inspección ocular sobre el inmueble objeto de la querella con el fin de verificar los hechos que le sirvieron de fundamento. Este auto SE COMUNICARÁ AL PROCURADOR AGRARIO COMPETENTE y se NOTIFICARÁ PERSONALMENTE A LA PARTE QUERELLADA O EN SU DEFECTO SE HARÁ MEDIANTE AVISO QUE SE FIJARÁ EN LA PUERTA DE ACCESO DEL LUGAR DONDE HABITE O EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, CON UN DÍA DE ANTELACIÓN A LA FECHA Y HORA DE LA DILIGENCIA.**

Interrogado el señor Inspector por la notificación al representante del Ministerio Público mediante derecho de petición, arguye en respuesta dada el día 8 de octubre de 2016, lo siguiente: “... **en referencia de comunicar al procurador agrario, en este municipio no existe oficina de procuraduría Agraria, esta se ubica en la ciudad de Santiago de Cali, se le comunicó telefónicamente, porque la ley para esta citación no tiene trámite especial, sugiriéndonos que el personero municipal, en su calidad de ministerio público podía participar en reemplazo suyo por ser adscrito a la Procuraduría General de la Nación con funciones de ministerio, y que se hiciera acompañar de otro funcionario municipal...**” (Ver documento). LO NOTIFICO POR TELEFONO (porque para esta citación la ley no tiene trámite especial), como si tal acto procesal no fuera efectivamente una imposición legal, o como si la norma contemplara una excepción a la notificación al Ministerio Público en donde ésta no tenga funcionario asignado. De acuerdo a reiterada jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, el municipio de Calima – El Darién, debió prima facie garantizar el fundamental derecho al debido proceso, notificando a los desplazados ocupantes del predio de la actuación que se estaba iniciando garantizándoles el derecho de defensa y en grado sumo, el derecho fundamental a la vivienda digna.

**NOVENO:** A folios 33, 34 y 35 del expediente y con fecha del mismo día de presentación de la demanda (19 de agosto de 2015), el Inspector de conocimiento libra sendos oficios a la Comisaria de Familia, al Personero Municipal y al Comandante de Policía, requiriendo el acompañamiento a la práctica de la diligencia. Nótese como en el oficio dirigido al Comandante de Policía (fl.35), le enuncia “**ESTA DILIGENCIA DE DESALOJO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2015 HORA 0.9.30, EN EL SITIO ROSA DE LOS VIENTOS VEREDA PUENTE TIERRA**”. Es decir, que desde que asumió el conocimiento de la actuación administrativa, el señor Inspector Municipal de Policía de Calima el Darién, deja entrever la firme intención de hacer caso omiso a la orden impartida por su superior jerárquico y que el único interés que le asistía era lanzarlos del predio que ocupaban, sin ninguna consideración a normas procesales y mucho menos a la condición de Víctimas de Desplazamiento Forzado y que como tal gozan de protección reforzada en términos de la Ley 1448 de 2011. De igual manera, no compareció a la irregular diligencia el personero municipal, funcionario encargado de velar por los derechos de las víctimas del conflicto.

**DECIMO:** La Secretaría del Despacho señora MARIA ADIELA PEREZ, suscribe acto procesal de “NOTIFICACION POR EDICTO” dirigido “...**A las personas indeterminadas que se encuentran irregularmente en el predio Condominio campestre Rosas del Viento de la Vereda Calima municipio del Darién... Que el Despacho de la Inspección Municipal de Policía de Calima Ha fijado la fecha del día 20 de agosto de 2015 a las (11:00 AM) Para realizar la Diligencia de Inspección ocular respectiva... Se fija el presente aviso de notificación en lugar visible a los 19 días del mes de agosto de 2015**” (resalto y subraya fuera de texto).

De dicho acto procesado se dice que se libró y fijó edicto “**en lugar visible**” (no dice el lugar de fijación y menos a la vista de quién o quiénes).

**DECIMO PRIMERO:** En el auto emanado de la Inspección Municipal de Policía, se fija el día 20 de agosto de 2015 a las 10:00 a.m. para la práctica de la inspección ocular; en los oficios dirigidos a la Comisaria de Familia, el Personero Municipal y al Comandante de la Policía, se les indica que la diligencia se llevara a cabo dicho día a las 9:30 a.m., y en el edicto se indica que la misma diligencia tendrá lugar a las 11:00 a.m.

**DECIMO SEGUNDO:** Pese a todo, al día siguiente, es decir, el 20 de agosto de 2015 a las diez de la mañana (10:00 a.m.), transcurridas apenas veinte (20) horas y diez (10) minutos de instaurada la referida querella, el señor Inspector Municipal de Policía del municipio de Calima El Darién, hace presencia en el predio Rosa de los Vientos para practicar “DILIGENCIA DE RESTABLECIMIENTO DEL ESTADO EN QUE SE ENCONTRABA EL PREDIO ANTES DE LA INVASIÓN EN PREDIO ROSA DE LOS VIENTOS. PROCEDIMIENTO AMPARO POLICIVO”.

Como quedó anotado, pese al cúmulo de evidentes irregularidades procesales, el funcionario llevó a cabo la diligencia, no de inspección ocular, sino de desalojo, omitiendo sin ningún pudor lo dispuesto en los artículos 9º y 10 del Decreto 0747 de 1992, ello es, proferir la decisión dentro de la misma diligencia de inspección ocular (que no lo fue como ha quedado sentado pero sí de desalojo) y notificarla a las partes para que pudieran presentar los correspondientes recursos de ley. Nuevamente, como se puede advertir fácilmente, el señor Inspector Municipal de Policía de Calima El Darién vulneró el derecho fundamental al debido proceso de los demandantes. Se concretó la revictimización de los desplazados.

**DECIMO TERCERO:** Así entonces, si por parte de la administración municipal de Calima – El Darién se hubieran garantizado el derecho fundamental al debido proceso y por ende se les hubiera notificado del procedimiento policivo iniciado como lo ordena la ley y el reglamento, habrían obviamente tenido la oportunidad de ejercer el derecho a la defensa. Es evidente el afán y premura en agotar el procedimiento por parte del señor Alcalde (e) y el señor Inspector de Policía de dicho ente territorial, movidos no sé por qué oscuros intereses, actuación que de hecho los sometió nuevamente a un desarraigo habitacional sin la garantía de que podrían alcanzar en otro lugar estabilidad económica y emocional, en donde pudieran rehacer sus planes de vida con el cubrimiento de sus necesidades más básicas.

**DECIMO CUARTO:** La fuerza pública (policía nacional – ejército nacional) tuvo participación activa en el injusto e ilegal desalojo de que fueron víctimas los desplazados demandantes, al punto que una de ellas (Sra. ANA LETICIA HIDALGO MOLINA) resultó con lesiones en su humanidad a causa de las agresiones de sus miembros.

**DECIMO QUINTO:** Denunciados el irregular procedimiento ante todas las instancias: Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la República, Defensoría del Pueblo y Personería Municipal del municipio de Calima – El Darién, y Rama Judicial a través de acción de tutela, ninguna de estas instancias han adelantado las respectivas investigaciones y las consecuentes sanciones, razón por la cual el desamparo Estatal profundiza la sensación de desprotección de los demandantes ahondando su frustración y desasosiego, de por sí palmario por el desplazamiento forzado a que fueron obligados por grupos armados al margen de la ley.

## **FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES**

Desde el punto de vista normativo, las pretensiones de la solicitud encuentran sustento jurídico legal en las siguientes disposiciones de derecho:

Constitución Política de Colombia: artículos 11, 29, 44, 51; Ley 1448 de 2011, Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su Observación General Número 7, que se ocupa del tema de los desalojos forzosos y la incidencia que tienen sobre el derecho a una vivienda digna, consagrado en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y demás normas concordantes.

La línea jurisprudencial trazada por la H. Corte Constitucional en casos como el presente, nos indican diáfamanamente la flagrante vulneración a derechos fundamentales y principios de derecho que les asistía a los convocados como población víctima del conflicto y por ende sujetos de especial protección.



Veamos: en Sentencia de tutela T-239 de 2013, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa, se arguye:

*“... En esta misma línea jurisprudencial, la Corte, en sentencia T-119 de 2012[68] analizó el problema de vivienda que afectaba a un grupo de personas desplazadas que habían ocupado un predio privado en el municipio de Riohacha y por tal situación se les había iniciado un proceso de lanzamiento por ocupación de hecho en el que se había decretado la diligencia de lanzamiento. La Corte constató que la administración municipal no tenía una alternativa de vivienda para reubicar a la población que iba a ser desalojada del predio privado, por lo que ordenó suspender la práctica de una diligencia de lanzamiento hasta que se garantizara el acceso a un albergue en condiciones dignas a los accionantes. En esta sentencia, la Corte ponderó los bienes jurídicos en conflicto, esto es, por un lado, el orden público y la igualdad formal en desarrollo del principio de legalidad, y por otro, la protección del derecho a la vivienda digna de la población desplazada, y precisó:*

*“La Sala considera que tiene un peso superior prima facie la garantía de los derechos de la población desplazada dado que se trata de sujetos de especial protección constitucional (...). La Corte reconoce que el desarraigo al que han sido sometidas las personas en situación de desplazamiento forzado genera una múltiple vulneración de sus garantías constitucionales y que de producirse el lanzamiento se agudizaría la afectación **intensa** de sus derechos fundamentales. Por su parte, la no ejecución de la orden de desalojo implica una alteración **intermedia** de los derechos de la querellante que confía en que las actuaciones de la administración están guiadas por el principio, de legalidad, la igualdad formal y el respeto al orden público. Lo anterior, considerando que el bien ocupado no está destinado a la satisfacción de su derecho a la vivienda pues la querella se interpone como representante legal del Colegio Helión Pinedo Ríos”.*

...

*Finalmente, es importante mencionar la sentencia T-454 de 2012,[69] en la que se estudió la solicitud de tutela elevada por el Fondo Ganadero del Meta S.A. para que se hiciera efectiva la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho sobre los ocupantes ilegales de una hacienda de su propiedad, que eran en su mayoría personas desplazadas. Si bien la Corte declaró la carencia actual de objeto, pues la diligencia de desalojo se había llevado a cabo, comunicó la providencia a las autoridades encargadas de atender a la población desplazada para que las familias que fueron desalojadas del predio en cuestión, tuvieran acceso a (i) un albergue en condiciones acordes para la dignidad humana; (ii) planes de vivienda que les permitieran garantizar este derecho a largo plazo; y (iii) los demás componentes de la ayuda humanitaria de emergencia y de estabilización socioeconómica previstos en la ley y en la jurisprudencia para esta población. La Corte, luego de reiterar la jurisprudencia relativa a los derechos de la población desplazada en materia de desalojos forzosos, concluyó:*

*“más allá de la procedencia o no del desalojo en un caso concreto, este no puede llevarse a cabo por las autoridades administrativas y de Policía sin tener en cuenta la previa verificación y garantía de los derechos fundamentales de quienes se encuentran ocupando el predio, mucho menos cuando dentro del grupo hay personas en condición de desplazamiento o sujetos de especial protección constitucional, frente a los cuales la solicitud de las autoridades debe ser aún mayor. Deben cumplirse reglas mínimas que garanticen la razonabilidad y la proporcionalidad del procedimiento, del mismo modo que deben adoptarse medidas previas y posteriores al lanzamiento, que garanticen las condiciones mínimas de ejercicio de los derechos fundamentales de los afectados”.*

...

*Conforme a los argumentos expuestos es viable concluir que (i) la tutela es procedente en términos formales para estudiar asuntos en los que la población desplazada se vea abocada a desalojos en el curso de procesos policivos de restitución bienes ocupados irregularmente. En esos casos, (ii) el Estado tiene la obligación de garantizar un albergue en condiciones acordes con la dignidad humana para los afectados con la actuación policiva y (iii), en caso de que ello no haya ocurrido aún, tiene el deber de activar el sistema de protección de la población desplazada y asumir las obligaciones establecidas por la jurisprudencia constitucional y la ley en cabeza de las distintas autoridades públicas frente*



a las víctimas del desplazamiento forzado.<sup>[70]</sup> Así mismo, (iv) en el trámite de los procesos de lanzamiento por ocupación de hecho, las autoridades de policía deben respetar el derecho al debido proceso tanto de los querellantes como de las personas que se encuentran ocupando el inmueble, y (v) en los casos de ocupación de predios privados es posible que el juez de tutela ordene la suspensión de la diligencia de lanzamiento hasta tanto no se haya garantizado un albergue provisional a la población desplazada afectada.

...

De otra parte, con el fin de proteger efectivamente el derecho a la vivienda digna de las personas desplazadas asentadas en los predios mencionados, esta Sala advertirá a la Alcaldía de Cúcuta y a la Inspección Segunda Urbana de Policía de Cúcuta que deberán abstenerse de ordenar y realizar cualquier diligencia de desalojo o lanzamiento sobre los predios concernidos, hasta tanto no se les garantice a las personas desplazadas asentadas en ellos un albergue provisional en condiciones dignas.

Y en aún más reciente fallo (Sentencia T-655/14), se afirmó:

No se puede materializar una orden de desalojo en perjuicio del derecho a la vivienda digna de personas desplazadas por la violencia, lo que supone disponer a su favor alternativas habitacionales en el corto plazo, y luego facilitar la inclusión en programas habitacionales definitivos para el largo plazo. Ello por cuanto, ese grupo poblacional ha sufrido directamente las consecuencias adversas del conflicto interno, viéndose obligados a dejar sus hogares y demás enseres, por ende, es contrario a la Constitución someterlos nuevamente a un desarraigo habitacional sin la garantía de que podrán alcanzar en otro lugar cierta estabilidad económica y emocional, en donde puedan rehacer sus planes de vida con el cubrimiento de sus necesidades más básicas.

...

(i) la tutela es procedente en términos formales para estudiar asuntos en los que la población desplazada e integrada por subgrupos que existen al interior de ésta, como las personas de la tercera edad, madres cabeza de familia, niños, personas discapacitadas, etc, se vean abocados a desalojos en el curso de procesos policivos de restitución de bienes ocupados irregularmente. En esos casos, (ii) el Estado tiene la obligación de garantizar un albergue en condiciones acordes con la dignidad humana para los afectados con la actuación policiva y (iii), en caso de que ello no haya ocurrido aún, tiene el deber de activar el sistema de protección y asumir las obligaciones establecidas por la jurisprudencia constitucional y la ley en cabeza de las distintas autoridades públicas frente a las víctimas del desplazamiento forzado. Así mismo, (iv) en el trámite de los procesos de lanzamiento por ocupación de hecho, las autoridades de policía deben respetar el derecho al debido proceso tanto de los querellantes como de las personas que se encuentran ocupando el inmueble y no puede materializarse hasta tanto no se adopten soluciones temporales en materia de vivienda.

Veamos seguidamente la regulación que fija el procedimiento para el caso que nos ocupa, contenida en el Decreto 0747 de 1992:

“... **ARTÍCULO 6.** La actuación se iniciará mediante querella que deberá ser presentada personalmente por la parte querellante o por su apoderado, ante la autoridad de policía competente, indicando la ubicación del predio invadido y los linderos o señales que sirven para identificarlo claramente.

**ARTÍCULO 7.** En el auto en que se avoque conocimiento, se fijará fecha y hora para la práctica de la inspección ocular sobre el inmueble objeto de la querella con el fin de verificar los hechos que le sirvieron de fundamento. Este auto SE COMUNICARÁ AL PROCURADOR AGRARIO COMPETENTE y se NOTIFICARÁ PERSONALMENTE A LA PARTE QUERELLADA O EN SU DEFECTO SE HARÁ MEDIANTE AVISO QUE SE FIJARÁ EN LA PUERTA DE ACCESO DEL LUGAR DONDE HABITE O EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, CON UN DÍA DE ANTELACIÓN A LA FECHA Y HORA DE LA DILIGENCIA.

**ARTÍCULO 8.** Llegados el día y hora señalados para práctica de la diligencia de inspección ocular, el funcionario de policía se trasladará al lugar de los hechos donde oír a las partes,

recepcionará y practicará las pruebas que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos.

...

**ARTÍCULO 9.** Practicadas las pruebas pedidas por las partes y las que se decreten oficiosamente, el funcionario de conocimiento **PROFERIRÁ LA DECISIÓN DENTRO DE LA MISMA DILIGENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR** y restablecerá en el inmueble la situación que existía antes de la invasión. De estas diligencias se levantarán actas y si fuere del caso **SE REALIZARÁ UN INVENTARIO DE LOS BIENES QUE NO PERTENEZCAN A QUERELLANTE DEJÁNDOLOS AL CUIDADO DE UN DEPOSITARIO**, mientras se hace presente el querellado.

**ARTÍCULO 10. CONTRA LA PROVIDENCIA QUE PROFIERA EL ALCALDE O FUNCIONARIO QUE HAGA SUS VECES, PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN** ante el respectivo gobernador. La reposición se resolverá dentro de la misma audiencia y el recurrente deberá exponer las razones que la sustenten. Si se interpone la apelación se enviará el expediente a la Gobernación, al día siguiente de resuelta la reposición.

**ARTÍCULO 11.** El recurso de apelación se resolverá de plano dentro de los dos días siguientes al recibo del expediente.

**ARTÍCULO 12.** Resuelto el recurso de apelación se devolverá el expediente para que el alcalde o funcionario que haga su veces, adelante la diligencia relacionada con el cese de perturbación, o archive el expediente según el caso. La diligencia se efectuará al día siguiente de recibido el expediente y en la misma se notificará la providencia que resolvió la apelación...”

Por su parte, la **ORDENANZA 343 DE 2012 del Departamento del Valle del Cauca**, fija el siguiente procedimiento para los actos de perturbación en bienes inmuebles de la siguiente manera:

“... **ARTÍCULO 324. ADMISIÓN DE LA DEMANDA.-** Cuando la demanda reúna los requisitos establecidos en de este Código, el funcionario de policía dictará auto admisorio de la demanda, que contendrá: **LA ORDEN DE PRACTICAR DILIGENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR, CON LA PRESENCIA DE UN PERITO**, al predio objeto de la demanda, **con el fin de especificar su ubicación, linderos, nomenclatura y demás circunstancias que lo identifiquen; los actos perturbadores objeto de la litis, el tiempo desde cuando se inició su ejecución y las personas realizadoras de los mismos**. La ratificación de los testigos extra-proceso. **La práctica de las demás pruebas conducentes a establecer los hechos enunciados en la demanda.**

**PARÁGRAFO.** **En la diligencia de inspección ocular** podrá llevarse la conciliación como mecanismo para la resolución del conflicto.

**ARTÍCULO 325. NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA.- EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA SE NOTIFICARÁ PERSONALMENTE AL DEMANDADO O DEMANDADOS**, pero si no fueren hallados o se ocultaren se surtirá la notificación por medio de un edicto fijado en la puerta del predio urbano o rural de que se trate, o en la puerta del domicilio del demandado o demandados, si fuere conocido. El edicto expresará que ha sido admitida la demanda, la fecha y hora señaladas para la diligencia de inspección ocular, será firmado por el funcionario secretario y **DEBERÁ PERMANECER FIJADO DURANTE UN (1) DÍA HÁBIL, PASADO EL CUAL, SE ENTENDERÁ SURTIDA LA NOTIFICACIÓN.**

**ARTÍCULO 326. CONCILIACIÓN.-** Si en la diligencia de inspección ocular se llegare a un acuerdo, el funcionario de Policía lo aprobará mediante providencia interlocutoria, la que no admitirá ningún recurso, proferida dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma de la conciliación y ejecutoriedad, se ordenará el archivo de expedientes.

**ARTÍCULO 327. PRÁCTICA DE PRUEBAS.-** Si en la diligencia de inspección ocular, no se llegare a la conciliación se continuará con la práctica de las pruebas decretadas en el auto admisorio de la demanda. En ella podrá intervenir la parte demandada a través de su

apoderado cuando así lo requiera y presentará las pruebas que pretenda hacer valer. Los testigos deberán estar presentes el día de esta diligencia, y sus declaraciones se suscribirán a medida que se reciban. Si alguno de estos se niega, así se hará constar y firmará por él un testigo que haya presenciado el hecho. El funcionario podrá limitar la recepción de testimonios cuando considere suficientemente claros los hechos materia de la prueba. La práctica de las pruebas se procurará realizar en un (1) solo día, y de no ser posible se suspenderá para continuarla y concluirla en un plazo no mayor de ocho (8) días.

...

**ARTÍCULO 328. APELACIÓN DE LOS AUTOS QUE NIEGUEN PRUEBAS.** El auto que niega pruebas es susceptible de apelación dentro de los dos (2) días siguientes a su notificación.

**ARTÍCULO 329. TRASLADO DEL DICTAMEN PERICIAL.** Rendido el dictamen pericial se correrá, al día siguiente traslado a las partes por un término común de dos (2) días durante los cuales se podrá pedir que se aclare o se amplíe, sin que haya lugar a objeciones por error grave. En el auto que así lo dispone, se fijarán los honorarios del perito, los cuales se tasarán teniendo en cuenta la naturaleza e importancia del dictamen.

**PARÁGRAFO.** El funcionario, antes de fallar, podrá de oficio ordenar al perito que aclare, complemente o amplíe el dictamen y, para ello, le fijará un término no mayor de dos (2) días.

**ARTÍCULO 330. TRASLADO PARA ALEGAR DE CONCLUSIÓN.** En firme el dictamen pericial, se correrá traslado a las partes por un término común de dos (2) días para presentar los alegatos de conclusión.

**ARTÍCULO 331. RESOLUCIÓN.** Vencido el traslado para alegar de conclusión, el funcionario, dentro de los ocho (8) días siguientes, proferirá la Resolución que pone fin a la primera instancia. La Resolución debe contener la orden al demandado o demandados de suspender el hecho u obra denunciados o su demolición o reforma dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de la resolución que así lo declare. En la misma Resolución se conminará al demandado con multa de cinco (5) a quince (15) salarios mínimos diarios legales vigentes para garantizar el cumplimiento de lo ordenado. Si se desconociese la orden, se procederá a su ejecución por el funcionario de policía con el uso de la fuerza pública, si fuere necesario. La resolución contendrá también la orden de levantamiento de la suspensión provisional que se había adoptado en la etapa probatoria, de no decretarse el Statu-Quo.

**ARTÍCULO 332. NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.** La Resolución se notificará personalmente a las partes dentro de los dos (2) días siguientes al de su pronunciamiento y, si no fuere posible, la notificación se hará por edicto que se fijará, en la secretaría del despacho por el término de tres (3) días.

**ARTÍCULO 333. APELACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.** Contra la resolución que decide el Statu Quo procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo que deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al de su notificación. En caso contrario, quedará ejecutoriada. El término para resolver sobre la procedencia o no de la apelación es de tres (3) días, contados a partir del día siguiente de la presentación del escrito de sustentación.

**ARTÍCULO 334. OTRAS NOTIFICACIONES.** Los Autos interlocutorios que se dicten en el procedimiento Civil de Policía se notificarán en la forma prevista en el Artículo 321 del Código de Procedimiento Civil.

Confrontando la realidad procesal con la normatividad legal y reglamentaria, fácil, muy fácil, resulta establecer que se violaron derechos fundamentales de los demandantes como el debido proceso que afectaron evidentemente su calidad de vida que de por sí ya venía deteriorada por la situación de desplazamiento que soportaban, situación que ha definido la jurisprudencia nacional y el bloque de constitucionalidad como “revictimización”, despojo que se llevó a cabo además con exceso de fuerza por parte de la fuerza pública que conllevó a causar lesiones personales a una de sus integrantes, situación que constituye el nexo causal, pues si se hubiera

garantizado a los actores sus derechos fundamentales, hubieran tenido la oportunidad de ejercer su derecho al debido proceso.

En consecuencia, con base en la postura jurisprudencial de la Corte Constitucional y a la demostración de que el daño antijurídico padecido por los reclamantes como consecuencia del irregular procedimiento administrativo surtido por el municipio de Calima El Darién con apoyo de la fuerza pública (policía y ejército nacional), es deber del Estado Colombiano indemnizar de manera integral los perjuicios ocasionados, ya que el mismo es el resultado de la falla del servicio predicable de las referidas entidades ante la omisión en el cumplimiento de sus funciones, actuación que por demás puede rayar en el código penal (prevaricato).

## **RELACION DE PRUEBAS**

Me permito aportar a la presente solicitud los siguientes documentos:

- Poderes debidamente otorgados por los demandantes.
- Documentos de identificación de cada uno de los demandantes.
- Constancias de registro de los convocantes en la Unidad para las Víctimas.
- Historia Clínica correspondiente a la Sra. Ana Leticia Hidalgo Molina.
- Querrela Penal por el punible de Abuso de Autoridad por Acto Arbitrario o Injusto instaurada por la convocante Yolanda Hidalgo Molina y otros ante la Fiscalía General de la Nación.
- Informe Pericial de Medicina Legal de la Convocante Ana Leticia Hidalgo Molina.
- Copia simple memorial dirigido al Defensor del Pueblo del Valle del Cauca, mediante el cual se le entera del procedimiento irregular de que fueron víctimas.
- Queja presentada por los convocantes referente al procedimiento ante la Personería Municipal de Calima – El Darién.
- Oficio No. 0011383 de fecha 20 de septiembre de 2016 suscrito por el Secretario de Gobierno de Calima – El Darién.
- Queja incoada por la Sra. Ana Leticia Hidalgo Molina ante la Procuraduría General de la Nación.
- Oficio No. 00166 de 10 de mayo de 2017 del Batallón de Alta Montaña No. 3 de fecha 10 de mayo de 2017.
- Copia simple del proceso de lanzamiento adelantado por el municipio de Calima – El Darién.
- Siete (7) fotografías del ilegal procedimiento de desalojo.
- Certificación extendida por la Procuraduría 60 Judicial I para Asuntos Administrativos en fecha 29 de septiembre de 2017 sobre el agotamiento de la Conciliación Extrajudicial.

### **A. - OFICIOS**

Solicito al señor (a) Juez, se sirva ordenar remitir oficio a las siguientes entidades:

1. Al señor Inspector Municipal de Policía de Calima El Darién para que remita copia íntegra y auténtica del expediente de amparo policivo promovido por la sociedad Fincar S.A. contra personas indeterminadas. Además informará si esa autoridad ha adelantado otros procesos de la misma naturaleza y cuál ha sido el procedimiento que se las ha imprimido a los mismos.
2. A la Fiscalía General de la Nación de Cali para que remita copia del expediente iniciado por la señora Ana Leticia Hidalgo Molina por el punible de Abuso de Autoridad por Acto Arbitrario o Injusto (Art.146 C. Penal) con número de noticia criminal 760016000193201528738.
- 3.- A la Personería Municipal de Calima – El Darién para que remita copia del expediente iniciado a raíz de la queja presentada por los demandantes por los actos de que fueron víctimas mediante el irregular procedimiento llevado a cabo por funcionarios de dicho ente municipal el día 20 de agosto de 2015 en el predio de su jurisdicción Rosa de los Vientos. Además indicará el motivo o

la razón para que incumpliera sus funciones como garante de los derechos de los ciudadanos en este caso en particular.

4.- A la Procuraduría General de la Nación para que remita copia del expediente iniciado a raíz de la queja presentada por la señora Ana Leticia Hidalgo Molina el día 13 de octubre de 2016 en contra de funcionarios tanto del ente territorial municipio de Calima El Darién, como de la fuerza pública.

5.- A la Defensoría del Pueblo de Cali, para que envíe copia del expediente que se debió iniciar a raíz de la queja presentada por el grupo de personas en situación de desplazamiento forzado por el irregular desalojo de que fueron víctimas el día 20 de agosto de 2015, presentada el día 21 de agosto de ese mismo año.

## **B. TESTIMONIALES**

Solicito al H. Juez, se sirva citar y escuchar en declaración a las personas que a continuación se relacionan, quienes son mayores de edad, y depondrán sobre las particularidades que rodearon el procedimiento de desalojo llevado a cabo por el Inspector de Policía del municipio de Calima El Darién:

- **JAIME ALBERTO POLINDARA ALVAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.762.139 de Cali, quien puede ser citado a través del suscrito apoderado.

- **FABEL LONDOÑO**, de quien se desconoce su documento de identificación y domicilio, pero fue uno de los dos conductores de los vehículos particulares que se contrataron para acarrear todas las pertenencias de los demandantes, mismo que se hará comparecer a través del suscrito apoderado.

- Se cite al **Dr. JAIME ANDRES NIÑO CACERES** quien fungía como Personero Municipal de Calima – El Darién para la fecha de los hechos, quien depondrá sobre el conocimiento que tenga sobre el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho adelantado por el señor Inspector Municipal de Policía de que trata esta demanda y sobre su actuación en el mismo. El señor NIÑO CACERES reside en el municipio de Calima – El Darién y se hará comparecer a través del suscrito apoderado al desconocerse su domicilio.

## **ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA**

Teniendo en cuenta las nuevas disposiciones legales y las orientaciones de la Jurisprudencia, la cuantía se determina en procesos como éste por el valor de la pretensión mayor, correspondiendo ésta para el presente asunto al valor determinado por concepto de perjuicios morales en cuantía de CIEN SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, equivalente a \$ 73'771.700.00.

La anterior cuantía deberá tomarse en consideración para todos los efectos legales.

## **ANEXOS**

Me permito anexar los siguientes documentos:

- Poderes otorgados a mi favor.
- Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.
- Copias de la demanda y de sus anexos para los traslados correspondientes
- CD en formato PDF que contiene la demanda.

## **REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD**

De acuerdo a lo ordenado por la Ley 1285 del 2009, en concordancia con la Ley 640 de 2001, se presentó solicitud de conciliación ante la Procuraduría Judicial ante lo Contencioso Administrativo de Cali. El trámite de conciliación resultó fallido según lo consignado en constancia de fecha 18 de abril de 2017 expedida por la Procuraduría 58 Judicial I para Asuntos Administrativos.

## NOTIFICACIONES

Las mías y la de los demandantes las recibiremos en la secretaría de su despacho o en la Oficina ubicada en la Carrera 4 N° 8-39; Oficina 602; Edificio Benjamín Herrera de Cali; Tel. 8852424/300 3413764, dirección electrónica [chenao44@hotmail.com](mailto:chenao44@hotmail.com). Aclaro que los convocantes, dada su condición de desplazamiento no cuenta con un domicilio fijo o estable y de igual manera no poseen teléfonos móviles o direcciones electrónicas.

Las notificaciones y traslados para el convocado Municipio de Calima – Darién en la Calle 10 No. 6-25 Palacio Municipal, dirección electrónica [ofijuridicacalima@gmail.com](mailto:ofijuridicacalima@gmail.com), teléfono 2533363.

La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por intermedio del Señor Ministro de Defensa o quien haga sus veces con sede en Bogotá, o a través del Comandante de la Policía Valle, ubicado en la calle 21 N° 1N-65 barrio Piloto de Santiago de Cali, dirección electrónica [decau.notificacion@policia.gov.co](mailto:decau.notificacion@policia.gov.co).

La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por intermedio del Señor Ministro de Defensa o quien haga sus veces con sede en Bogotá, la dirección electrónica del Ejército Nacional para efecto de las notificaciones a que hubiere lugar es [notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co](mailto:notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co).

La dirección electrónica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para efecto de las notificaciones a que hubiere lugar es: [procesos@defensajuridica.gov.co](mailto:procesos@defensajuridica.gov.co), o [buzonjudicial@defensajuridica.gov.co](mailto:buzonjudicial@defensajuridica.gov.co).

Atentamente,

CESAR HUGO HENAO CORREA  
C.C. No 16.684.032 de Cali (Valle)  
T.P. 84.396 del C.S. de la J.